

MARZO-1991

Excelentísimo  
Señor Patricio Aylwin  
Presidente de la República de Chile  
Palacio de La Moneda  
Santiago.



Estimado Señor Presidente:

al cumplirse un año de la instalación del gobierno democrático que Ud preside, deseamos entregarle un saludo afectuoso y nuestro apoyo a la gestión que Ud. lleva adelante por hacer avanzar la transición y la consolidación de la democracia chilena,.

Este primer aniversario transcurre cuando el país ha conocido, con profunda conmoción, el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a los Derechos Humanos que culminaron en desaparecimientos y ejecuciones, perpetradas durante los 16 años del régimen dictatorial del general Pinochet.

Creemos que su decisión de constituir la Comisión presidida por el destacado jurista Raúl Rettig, el profundo trabajo de investigación y recopilación de antecedentes que ella llevó a cabo y el contenido del informe, y el hecho de que haya sido la máxima y mas legítima autoridad del Estado, el Presidente de la República, quien haya dado a conocer al país, constituye, en si mismo, una importante conquista de la Democracia en el plano moral, político y jurídico.

Se establece a partir del Informe una verdad indiscutible sobre la dimensión de la violación sistemática a los Derechos Humanos que debe ser asumida por todas las instituciones del Estado, por todos los chilenos, y que, como lo ha señalado la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, debe dar paso a gestos concretos de arrepentimiento y de reconciliación en particular de quienes participaron directamente o fueron responsables políticos o intelectuales de este genocidio.

Como Ud. sabe, ARCD, es un movimiento integrado esencialmente por gente que vivió en primera persona la represión de la Dictadura. Muchos de nuestros adherentes son familiares de ejecutados o desaparecidos, otros vivieron los campos de concentración, las torturas, los arrestos, y confinamientos, y el exilio. Es desde esta cercanía del problema que deseamos expresarle nuestra alta valoración de la actitud moral y política implícita en su mensaje entre los chilenos y nuestro apoyo a la medida que Ud. ha propuesto a las instituciones y al país todo.

Coincidimos con su reflexión sobre las responsabilidades, en todo lo ocurrido del Poder Judicial. El grave abandono de sus funciones, la ausencia de coraje y dignidad moral de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema, la

pérdida total de independencia frente a la política oficial de terrorismo de estado de la dictadura, y la reiterada ausencia de voluntad para impartir justicia, han provocado un desprestigio y una falta de credibilidad del Poder Judicial que solo puede recomponerse a través de una profunda reforma y de una reestructuración de la justicia chilena en todos sus niveles.

Gestos mínimos de la Corte Suprema debieran ser el acoger su llamado a investigar sea las situaciones anteriores a 1978, que aparecen penalmente cubiertas por la Ley de Amnistía, como los casos de los desaparecidos, que como Ud muy bien señala, no habiendo sido encontrados no puede darse una fecha de término del delito y por ende no puede invocarse la Ley de Amnistía para impedir una investigación que al menos permita a los familiares saber que ocurrió, porque fueron secuestrados y asesinados, y donde ese encuentran sus restos.

Este es un deber moral reparatorio que la Corte Suprema debe asumir, como así mismo debe reabrir, llevar a término e instruir nuevos procesos en virtud de los antecedentes entregados por la Comisión Rettig.

Resulta inaudito que la Corte Suprema responda al oficio de su Excelencia ligándolo a una supuesta campaña de desprestigio y que considere que el esclarecimiento de la Verdad constituye un riesgo para el mantenimiento de la institucionalidad.

Rechazamos también enérgicamente la pretensión de la derecha -que cubrió y apoyó en el pasado los peores gestos de autoritarismo- de impedir que el Presidente de la República opine sobre el grave abandono de sus deberes por parte de la Corte Suprema. Lo que se busca es confundir a la opinión pública y garantizar que el Poder Judicial mantenga su actual actitud.

Estamos ciertos que la inmensa mayoría del país rechaza estos intentos antidemocráticos de la derecha y de la Corte Suprema y que apoya la actitud asumida por su Excelencia en defensa de la Verdad y de la Justicia.

El país requiere para sanar esta profunda herida, que haya reconocimiento múltiple de la Verdad, que a ella no se le busque atribuir explicaciones absurdas, y que haya justicia de manera de hacer creíble el proceso de reconciliación, de paz, e impedir que frustrados todos los esfuerzos por obtener respuestas del Estado, haya gente que crea posible utilizar nuevas violencias para reparar el dolor ocasionado por los crímenes de la dictadura.

Al mismo tiempo, Excelencia, estimamos que la magnitud de la verdad revelada, debiera motivar, por propia iniciativa personal o de las instituciones correspondientes, el abandono de las funciones -sean civiles o

militares- por parte de aquellos que estuvieron comprometidos con esta sistemática represión. Personas como el senador designado Sergio Fernández, ex Ministro del Interior del régimen militar en un período muy duro para la oposición democrática, y el propio general Pinochet, que tiene la principal responsabilidad política y militar en lo ocurrido, debieran renunciar voluntariamente a sus cargos para lograr una moralización de las instituciones, una plena integración de ellas al proceso de transición, y facilitar la reconciliación entre los chilenos.

Deseamos también, Sr. Presidente, subrayar el valor que le otorgamos a su compromiso personal y a la responsabilidad moral que Ud. ha decidido asumir ante el país, al generar y hacer efectivo los mecanismos para obtener la libertad de los presos políticos y sanear de esta forma, una de las mayores injusticias que aún se mantienen como herencia del régimen militar, y que no tuvo la oportuna y adecuada solución producto de la actitud mezquina y obstruccionista de la derecha.

De otra parte queremos expresarle, nuestro pleno apoyo a las principales reformas institucionales que el gobierno impulsa y en particular a la reforma municipal y a la reforma del Poder Judicial que consideramos claves para desmontar el andamiaje autoritario que aún se mantiene y democratizar las instituciones del Estado. Estimamos necesario enfrentar a los sectores opositores de derecha con la evidencia del boicot que practican a las iniciativas del Ejecutivo de manera que todo el país reconozca sus responsabilidades y la voluntad de continuar cobijándose bajo formas de poder autoritario, para mantener ilegítimamente cuotas de poder que no son expresión de la verdadera soberanía popular.

Esperamos Sr. Presidente, que en 1991 se avance también en la solución del drama de los más pobres que representan casi un 40% de nuestra población. Conjuntamente con mantener la necesaria estabilidad económica, de es evidente que deben producirse procesos redistributivos y que una parte creciente de las inversiones deben estar destinadas a satisfacer las necesidades urgentes de trabajo, habitación, salud, educación, y las condiciones de seguridad para nuestra población.

Las leyes del rígido mecanismo de la economía de mercado, no debieran hacer olvidar la incorporación de una visión solidaria y humanista de los programas económicos y la necesidad de repotenciar la intervención social del estado en materias que son determinantes para la vida de los chilenos y que han sido gravemente lesionadas por la extrema política de privatizaciones practicada por la dictadura.

Chile vive el drama de la marginalidad de una amplia franja de la población -frente a la opulencia de otros sectores- y sólo el abordar este problema con un proyecto de mejoramiento global de la calidad de la vida, puede evitar que la marginalidad económica se transforme también en disociación cultural, psicológica, territorial y legal, con las graves

consecuencias que ello tiene para la vida de esta parte tan significativa de los chilenos, y para la propia estabilidad y desarrollo de la democracia.

Nos parece urgente que la Concertación por la Democracia -que fue capaz de conducir al país a una salida a la Dictadura y a una transición pacífica a la democracia- asuma en plenitud en esta fase tan decisiva, su rol de vínculo permanente con la gente y que en conjunto con las estructuras del gobierno democrático, con las organizaciones sociales, se busquen nuevas y adecuadas formas de auténtica participación de la sociedad civil en el proceso.

ARCO, que nace justamente para intentar reforzar desde la Izquierda la transición a la Democracia, compromete todo su esfuerzo unitario para apoyar el cumplimiento del Programa de la Concertación y los planes de desarrollo del gobierno que Ud. tan dignamente preside. Ninguna fuerza de Izquierda y de progreso puede hoy declararse de oposición al gobierno democrático, ya que este difícil proceso de reconstrucción de la democracia, requiere subordinar los intereses partidistas a los anhelos y las esperanzas de un pueblo que ha sufrido y luchado mucho, y que sin embargo ha dado muestras de una madurez política y de una vocación cívica y democrática tan profunda que le ha permitido a Chile transitar inéditamente hacia el reencuentro con nuestra historia y nuestros valores republicanos.

Le rogamos que en este día tan importante para Chile reciba el apoyo de la Asamblea de Renovación de los Comunistas.

Atentamente, por la Mesa de Coordinación



Fanny Pollarolo  
Presidente